



La Dimensión de las Microfinanzas Rurales en América Latina: Un Análisis Comparativo de Cuatro Países

Juan Carlos Caro

Noviembre 2003

Juan Carlos Caro es Investigador de RIMISP, Ingeniero Comercial y candidato a Magíster en Economía Agraria.

El autor agradece la valiosa cooperación realizada por la Fundación Ford, Región Andina y Cono Sur, para la elaboración de este artículo, especialmente al Sr. Jean Paul Lacoste, Oficial del Programa Finanzas para el Desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos que ha caracterizado al sector financiero de América Latina en la última década son los significativos cambios producidos en la profundización financiera de los países, esto significa que amplios sectores de la población tengan acceso al financiamiento bancario. No obstante, los beneficios de estos cambios sólo han ocurrido en el ámbito urbano y además sobre determinados segmentos de la población. Uno de los sectores que aún permanece marginado de este proceso es el de la microempresa. Como una forma de hacer frente a esta carencia, desde los primeros años de la década pasada se han desarrollado esfuerzos significativos para atender el déficit de financiamiento; fenómeno al que se denomina microfinanzas. Aunque estos esfuerzos se han orientado fundamentalmente a atender las necesidades de microcrédito, las microfinanzas cubren toda una gama de servicios financieros a micro-escala, entre los que se encuentra el crédito, los depósitos y los seguros¹. La mayor parte de la literatura sobre el tema reconoce el amplio desarrollo que ha tenido la industria microfinanciera en Bolivia, Colombia y Perú, y también rescatan importantes experiencias en Centro América y el Caribe, incluyendo a México.

El financiamiento rural se refiere a una amplia gama de servicios financieros ofrecidos por proveedores que operan en el contexto de los mercados financieros rurales (MFR). Las microfinanzas rurales comprenden instituciones financieras formales e informales, de mayor o menor dimensión, que proporcionan servicios financieros reducidos a los campesinos pobres y pequeños productores rurales, así como servicios financieros de mayor cuantía a las empresas de elaboración de productos agropecuarios y a otras pequeñas y medianas empresas rurales. Abarca una amplia gama de instituciones de microfinanciamiento (IMF), que va desde las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio, las cooperativas, organismos no gubernamentales (ONG) y compañías financieras, hasta los bancos rurales y los bancos de desarrollo agropecuario (FIDA 2003).

Aunque en la mayor parte de los países de la región no se encuentra documentado, una labor significativa y relevante en el financiamiento rural es realizada por los “proveedores informales”. Estos agentes de crédito normalmente corresponden a intermediarios en la cadena agropecuaria, son proveedores de insumos, centros de compra, empresas de factoraje, corredores de seguros y almacenes o bodegas. Muchos de ellos son comerciantes o empresas distribuidoras nacionales. La presencia de estos actores surge como consecuencia del retiro de la banca comercial del financiamiento rural y representan una alternativa que soluciona la escasez de crédito formal.

¹ Se calcula que menos del 5% de las microempresas de América Latina tiene acceso a fuentes institucionales de crédito (Berger, 2000).

La mayor parte de los estudios referidos al microfinanciamiento rural indican que aún persiste un fuerte rezago frente a lo que ocurre en el ámbito urbano. En términos generales, se señala que las áreas rurales son zonas con baja demanda, con mayores costos de transacción y que poseen estacionalidad en la producción. En la mayoría de los países el sector agropecuario sigue siendo la principal actividad económica de las zonas rurales, y como tal, está sujeto a una serie de riesgos inherentes a la actividad: cambios por variación climática, frecuencia de desastres naturales, y habituales variaciones en los precios. Estos elementos lo convierten en un sector de mayor riesgo.²

Además de estos factores de riesgo, los agentes de crédito, especialmente de las instituciones formales de crédito, perciben a los pequeños productores con una baja capacidad de pago. Los agentes consideran que los agricultores tienen bajas tecnologías y que manifiestan serios problemas de comercialización; muchos productores tienen dificultades de demostrar la documentación contable y las garantías necesarias para la entrega de un préstamo. Estas percepciones han generado una postura adversa de las instituciones hacia la entrega de créditos, que muchas veces no es acertada y que, además, se generaliza a todos los productores agropecuarios, perjudicando a todo el sector. Otro elemento importante es el que se refiere a los costos de transacción tanto de proveedores como demandantes. Estos costos incluyen las exigencias que existen en la legislación financiera respecto de la obligación de provisiones por pérdidas y la imposición de una tasa de interés máxima legal. Este conjunto de factores ha contribuido a desincentivar a los proveedores formales a participar en la oferta crediticia rural³.

Este artículo tiene por objetivo entregar una visión documental respecto de la dimensión y profundidad que tienen las microfinanzas rurales en cuatro países de América Latina, especialmente de la zona sur. Para ello se analizan los datos de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Esta selección de países se caracteriza por la diversidad de proveedores y de entornos que definen a cada uno de ellos. Los antecedentes que aquí se señalan demuestran que aún existen regiones en donde el desarrollo de finanzas rurales es incipiente, habiendo, por lo mismo, un creciente interés de parte de gobiernos, agencias internacionales y otros actores nacionales por el conocimiento sobre la realidad del sector. Con el presente artículo se pretende contribuir a la comprensión de esta realidad, al mismo tiempo que se quiere señalar la importancia de seguir indagando sobre este importante tema.

² Aunque es claro que las actividades no agropecuarias en las zonas rurales son de suma importancia, la producción agrícola aún sigue siendo relevante y, por lo tanto, las implicancias que tiene el comportamiento del sector agropecuario en el análisis de los mercados financieros rurales aún tiene vigencia. Un debate amplio respecto de la importancia de las actividades no agropecuarias en las zonas rurales se encuentra en Reardon, et al (2001).

³ Las causas y consecuencias del subdesarrollo de los mercados financieros rurales son ampliamente analizados en una reciente publicación del BID (Wenner, Alvarado y Galarza 2002).

Frente a cualquier análisis respecto del financiamiento rural, es necesario indicar que la mayoría de los proveedores financieros, especialmente los relacionados con el sector formal tradicional (bancos y compañías financieras) y también muchas cooperativas de ahorro y crédito y ONG, registran sus operaciones y servicios sin distinguir la dimensión rural de la urbana. El *modus operandi* más utilizado es registrar las operaciones financieras clasificándolas según los sectores productivos de la economía, dentro de los cuales se incluye la agricultura. En este artículo se considera el financiamiento agropecuario, como una variable *proxí* del financiamiento rural. Es necesario aclarar que este fenómeno deja de manifiesto una falencia significativa en la interpretación y análisis de la información, ya que esta aproximación implica subestimaciones que podrían ser contraproducentes al momento de formular estrategias y políticas de apoyo al sector rural.

La información disponible en los países demuestra que hay una mayor cobertura en el crédito agropecuario en desmedro del registro de los demás servicios financieros. Sobre la preponderancia que se la ha dado al tema del crédito agropecuario hay una amplia discusión respecto de lo que se denomina “paradigma de las finanzas rurales”. En este paradigma se reconoce la necesidad de incorporar la movilización de depósitos (ahorros) en las zonas rurales, a fin de incrementar el alcance y la posibilidad de sostenibilidad de las instituciones de microfinanciamiento como proveedores de servicios, especialmente las ONG (Vogel 2003)⁴.

⁴ Se considera que una IMF es sostenible, si al menos cumple con los siguientes principios (FIDA, 2003):

- viabilidad: tener un margen que permita cubrir los costos;
- independencia: movilizar los propios recursos;
- autosuficiencia financiera: ser rentable y conservar el valor de los recursos;
- alcance: ampliar los servicios para los pobres;
- impacto: ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos.

LAS MICROFINANZAS RURALES EN PERÚ

De acuerdo a los antecedentes reunidos para los cuatro países analizados, Perú es el que manifiesta un mayor grado de desarrollo de las finanzas rurales⁵. De un total de 70 instituciones que actúan como proveedores de microcrédito, más de la mitad (54%) mantienen algún rango de su cartera en el área rural. Los principales oferentes son las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y las ONG, con presencia local a través de 12 y 16 organismos, respectivamente.

Cuadro 1 – Perú: Distribución de la cartera agropecuaria de las instituciones de microfinanzas. Valores estimados a diciembre de 2001 (miles de dólares)

	Nº instituciones con créditos rurales/agropecuarios	Cartera rural/agropecuaria estimada (MUS\$)	Porcentaje promedio de cartera rural	Nº clientes agropecuarios
Bancos comerciales ⁶	s.i	349,668	3.3%	3,851
Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC)	8	17,522	7.9%	11,724
Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC)	12	35,466	46.9%	9,305
Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa Edpyme	2	1,498	8.3%	1,749
ONG	16	11,800	65.0%	66,000
Total	38	415,954		92,629

Fuente: Elaboración propia a partir del datos del estudio de Trivelli et.al. (2003) y de estimaciones propias de acuerdo a la base de datos de Fundación Ford.

Como se muestra en el cuadro 1, los principales proveedores de financiamiento agropecuario en Perú son los bancos comerciales. Al año 2001, controlaban el 84% de los créditos en el país, pero si observamos la evolución desde 1995 vemos que esta participación ha disminuido, permitiendo el incremento de la oferta de los otros proveedores (cuadro 2, no incluye ONG). Un dato adicional es que los bancos que más proveen de crédito agropecuario no son las instituciones que se consideran “representativas” en las microfinanzas en el país (Mi Banco y Banco de Trabajo). Las cifras demuestran que el crédito de los bancos comerciales se concentra en un grupo reducido de deudores que representan apenas el 4.2% de los deudores totales del sector. Esto señala que los bancos están fuertemente segmentados hacia los medianos y grandes agricultores. En este grupo el crédito agropecuario promedio es de US \$90,799 (dólares de 2001).

⁵ Algunos investigadores señalan que las microfinanzas rurales requieren de un mayor desarrollo, comparado con el avance que muestran las zonas urbanas (Trivelli et al, 2003).

⁶ Aunque los bancos aquí señalados no son parte de los proveedores de microfinanzas, se han incorporado sus datos para señalar que a pesar de una alta presencia de proveedores, el volumen de financiamiento rural aún es controlado por los bancos comerciales.

El cese de funciones del Banco Agrario del Perú (BAP) en el año 1992, provocó un déficit en el financiamiento rural. Hasta su cierre, el BAP proveía de créditos al sector agrario y rural con una cartera promedio de US \$900 millones anuales, monto que representa el doble de la cartera agropecuaria de 2001 (cuadro 1). Para cubrir en parte este déficit, el Estado impulsó la formación de las CRAC. Estas organizaciones se suman a las otras instituciones de microfinanciamiento formal que existen en Perú: las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) y las Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYME)⁷. Las CRAC ocupan hoy el segundo lugar en las finanzas agropecuarias de Perú (aunque lejos respecto de los bancos); sus colocaciones representan el 8.5% del total del sistema, que fueron de US\$ 35 millones en el año 2001. Estos organismos mantienen una proporción significativa de los deudores agropecuarios (10% del total). Y a pesar de la importancia que tienen en el financiamiento rural, su cobertura actual es ínfima con relación a la demanda que proviene de los sectores productivos rurales y que están representados por productores agropecuarios y no agropecuarios que laboran en microempresas, formales e informales, tanto individuales (autoempleo) como aquellas que tienen más de un trabajador⁸.

De acuerdo a estudios basados en datos de las Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), las CRAC son las instituciones microfinancieras del sector formal que tienen un mayor grado de riesgo respecto de los demás organismos. Poseen una de las más altas tasas de morosidad y manifiestan deficiencias en la operación financiera, además se caracterizan por tener los más altos intereses (Portocarrero et al 2002). La distribución de la cartera de créditos, según ramas económicas, indica que sólo el 47% de ellas se destina a actividades netamente agropecuarias, mientras que una parte importante está orientada al sector comercio (42%).

Esto señala que las CRAC mantienen una participación importante en zonas urbanas, peri urbanas y/o actividades rurales no agropecuarias, lo que obedece a una estrategia de diversificación de cartera y disminución del riesgo. La crisis agropecuaria generada por la presencia de la corriente del niño en el año 1998, agregada a la crisis externa de financiamiento del mismo año, provocó serios problemas que afectaron la sostenibilidad de estas instituciones.

Por su parte, las CMAC y las EDPYME también tienen una importancia creciente en las finanzas rurales. Especial atención merecen las CMAC, ya que su participación en la cartera crediticia agropecuaria ha aumentado significativamente en los últimos siete años. Como se aprecia en el cuadro 2, en el año 1995 las colocaciones agropecuarias fue de US\$3.1 millones y en el 2001

⁷ A diferencia de las CMAC y de las CRAC, las Edpymes están imposibilitadas para capturar depósitos del público.

⁸ La población económicamente activa en las zonas rurales se estima en cuatro millones de personas (Trejos, 2003).

pasaron a US\$17.5 millones, llegando a representar en la actualidad casi el 50% de la cartera de las CRAC. Otra característica relevante es que estas instituciones mantienen el 12.7% de los deudores agropecuarios del sistema (alrededor de 12,000 clientes); esto configura un escenario en el cual las CMAC se convierten en organismos que tienen incidencia significativa en las microfinanzas rurales. Al comparar las cifras de ambos tipos de instituciones, se obtiene que las primeras tienen un crédito promedio de 1,495 dólares por deudor, mientras que las segundas mantienen un crédito promedio de 3,811 dólares.

La situación de las EDPYMES es menos promisorias para las finanzas rurales, su campo de acción se orienta mayormente hacia las microempresas de carácter urbano, aunque no es exclusivo, puesto que en el año 2001 participaron con una oferta agropecuaria de 1.5 millones de dólares. Estas instituciones son de creación reciente (1998) por lo que aún muchas de ellas se encuentran en un proceso de consolidación financiera y operativa, lo que indica que su accionar en el ámbito rural debe evaluarse con cautela.

**Cuadro 2- Perú: Colocaciones Agropecuarias del Sistema Financiero 1995-2001
(miles de dólares)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Bancos comerciales	257,135	350,143	436,771	438,219	373,397	391,363	349,668
Financieras	2,898	1,702	3,425	4,778	1,015	739	1,962
CMAC	3,152	6,387	8,769	11,892	14,898	15,015	17,522
CRAC	10,964	23,620	32,715	36,529	33,892	34,360	35,466
EDPYMES							1,498
TOTAL	274,149	381,852	481,679	491,418	423,203	441,477	406,116

Fuente: SBS. Elaboración propia

Otro actor significativo en el ámbito rural lo constituyen las ONG crediticias. De un total de 26 organismos identificados, 16 declaraban tener algún campo de acción en el ámbito rural. Estas ONG mantienen un porcentaje de cartera rural de 65% (promedio no ponderado). Si se utilizan estas proporciones se estima que la cartera rural de las ONG es cercana a los 11.8 millones de dólares, con una atención de 66,000 clientes. Estas cifras convierten a las ONG como los proveedores más representativos en microcréditos, lo que es coherente con su campo de acción hacia sectores de bajos ingresos, muchos de los cuales están en situación de extrema pobreza. El promedio no ponderado del crédito agropecuario de las ONG es de 180 dólares por cliente⁹.

Es necesario realizar un alcance respecto del impacto que tendrá la reciente formación de AGROBANCO en las microfinanzas rurales de Perú. El Estado

⁹ Una de las ventajas que tienen las ONG, respecto de las instituciones formales de crédito, es el conocimiento y cercanía que mantienen con sus clientes. Además, muchas de ellas prestan servicios no financieros como asistencia técnica, lo que las hace más atractivas para los pequeños productores.

tomó la decisión de formar un banco de financiamiento agropecuario en diciembre de 2001, lo que se interpreta como una intervención estatal directa en el mercado financiero rural. El surgimiento de esta instancia deriva de presiones y demandas políticas planteadas por algunos sectores de la sociedad. En su diseño se especifica que el banco actuará como banca de primer y segundo piso. La primera modalidad la realiza a través de la entrega directa de créditos de corto plazo a pequeños productores agropecuarios siempre y cuando se encuentren asociados a una cadena productiva. Mientras que como banca de segundo piso realiza intermediación financiera a través de las demás instituciones que actúan en las microfinanzas (CMAC; EDPYMES y CRAC).

Un reciente estudio sobre el impacto de AGROBANCO en las finanzas rurales entrega algunos antecedentes respecto de su diseño y constitución, el que tendría algunas falencias que pueden afectar notoriamente su sostenibilidad. Entre las observaciones se señalan (Aguilar 2003): Los recursos con los que cuenta son limitados (el capital inicial es de 30 millones de dólares y no hay participación de privados); tiene una alta dependencia del Ministerio de Agricultura en la provisión de recursos; podría generar competencia desleal si decide subsidiar la tasa de interés de los créditos; la tecnología y productos financieros que ofrece no corresponde a la demanda de créditos de los productores (no entrega créditos a productores individuales ni a aquellos que no estén vinculados a una cadena productiva); su campo de operaciones está concentrado en las zonas geográficas más dinámicas y con potencial exportador. Todos estos elementos indican que aún siendo un actor potencialmente influyente en las finanzas rurales no constituye una amenaza para los demás proveedores ni tampoco se considera solución a la problemática del financiamiento rural. Su escasa colocación de créditos (a agosto de 2003 sólo llegaba a 1.8 millones de dólares) y sus dificultades de capital y financiamiento indican la necesidad de rediseño o modificación en el esquema de operación.

Un aspecto importante del sector microfinanciero en Perú es la existencia de varias instituciones que actúan en red y que prestan servicios a los distintos organismos que agrupan. En el ámbito rural, la más significativa es el Consorcio Promoción de la Mujer y de la Comunidad, PROMUC, una asociación civil nacional que inició sus actividades en 1994. Actualmente, PROMUC cuentan con 11 instituciones socias, está compuesta por 800 bancos comunales y tiene más de 15,000 socias a nivel nacional. Además, existen dos federaciones importantes: la Federación de CMAC (que es bastante sólida y presta servicios importantes a sus organizaciones asociadas) y la Federación de CRAC.

Desde el punto de vista de la demanda, la población rural muestra un escaso acceso al microfinanciamiento, especialmente formal. Una aproximación a la magnitud de este acceso puede observarse en el porcentaje de los hogares rurales con acceso al crédito. Los estudios realizados con datos de la encuesta

ENNIV 2000¹⁰, muestran que el acceso de los hogares peruanos al crédito se redujo drásticamente en los últimos tres años. En el 2000, el porcentaje de hogares rurales que dispone de alguna fuente de crédito llegó al 13%, poco más de la mitad del porcentaje que alcanzó en 1997 (21.1%), y menor al que se registró en 1994 (16.1%) (Instituto Cuanto, 2000). La mayor parte de este acceso se produce a través de fuentes informales, ya que los bancos, CMAC y cooperativas sólo contribuyen con el 3.7% de este acceso.

Otra perspectiva de la demanda se puede observar a través del número de productores rurales considerados microempresarios. Según el Ministerio de Agricultura, la microempresa (minifundio y pequeña propiedad agropecuaria) comprende 1,178,115 unidades de producción (70.1% del total) menores a 3 hectáreas y un tamaño promedio por unidad de 1.06 has. Así señalado, la cobertura que tienen las instituciones de microfinanciamiento rural no supera al 7.5% del total de la demanda en estas zonas (MINAG, 2002).

¹⁰ La Encuesta Nacional de Hogares Sobre Niveles de Vida del 2000 (ENNIV - 2000) recoge información de 3,978 hogares de representación nacional. Según los resultados, en las zonas rurales el 66% de los hogares se consideran pobres, de los cuales el 30% son hogares pobres extremos. Además, el 70% de los hogares son microempresarios según los criterios de la ENNIV. La población rural de Perú es de 29%.

LAS MICROFINANZAS RURALES EN CHILE

Chile se caracteriza por tener un mercado financiero rural reducido y altamente segmentado. Los principales proveedores del crédito son los bancos comerciales, algunas cooperativas de ahorro y crédito, oferentes de crédito informal (proveedores de insumos y tecnologías), y por último, INDAP, institución del Estado dependiente del Ministerio de Agricultura. A pesar de la presencia de numerosos proveedores, la dimensión de las finanzas rurales aún sigue siendo reducida, especialmente la que se refiere a pequeños productores. Cabe señalar que existen una serie de instrumentos de financiamiento de segundo piso impulsados por el Estado, pero que no benefician mayoritariamente a la pequeña agricultura.

A partir de 1990, se produjo una disminución importante del acceso al crédito bancario de parte de los productores agropecuarios, lo que se debió a dos razones: una fuerte reducción de los subsidios directos y el retiro de los bancos comerciales del financiamiento en el sector agropecuario. El retiro de los bancos obedeció a una opción estratégica de participación mayoritaria en mercados “masivos” y homogéneos (profundización), especialmente en el área urbana.

Cuadro 3 - Chile: Distribución de la cartera agropecuaria y rural de las instituciones de microfinanzas. Valores estimados (miles de dólares)

	Nº instituciones con créditos rurales/ agropecuarios	Porcentaje promedio de cartera rural	Cartera rural estimada (MUS\$)	Nº clientes rurales/ estimados
Banca microempresa (incluido Banco Estado)	3	4.5%	4,537.2	4,700
Cooperativa de Ahorro y Crédito	4	4.4%	76.8	500
ONG	3	68.2%	58.4	480
Organismo Público (INDAP)	1	100.0%	46,000.0	60,000
Total	11		50,672.4	65,680

Nota: Cifras no oficiales. Estimación propia sobre la base de información obtenida para cada una de las instituciones. La información de los bancos corresponde al año 2003, en los otros casos, es de años anteriores. Se ha realizado una proyección (con el promedio) en algunas instituciones. Hay que señalar que no existe un catastro de esta naturaleza.

El cuadro 3 muestra la composición y distribución del crédito rural destinado a la microempresa en Chile. De un total de 23 organizaciones financieras identificadas como proveedores de microfinanzas, 11 de ellas tienen acciones en el área rural¹¹. En la mayoría de ellas, la cartera agropecuaria no supera el 5% del total, exceptuando dos ONG e INDAP, que trabajan exclusivamente en el ámbito rural. La cartera rural total de estas instituciones se estima en \$50.6 millones de dólares, que benefician a poco más de 65.000 productores. Estos valores dejan en evidencia la preponderancia que tiene INDAP en la estructura

¹¹ La mayor parte de estas instituciones participan de los instrumentos de articulación financiera de INDAP.

de financiamiento, ya que representa el 90% de la oferta total de créditos destinado a pequeños productores rurales.

Según las cifras entregadas por ODEPA¹²- que provienen de la Superintendencia de Bancos- el saldo de las colocaciones agropecuarias en Chile eran de \$1,632.2 millones de dólares en febrero de 2003, valor que representa apenas el 4% de las colocaciones totales del sistema financiero¹³. Suponemos que la mayor parte de ellas se encuentra en los segmentos de medianos y grandes empresarios agropecuarios vinculados preferentemente a la agricultura de exportación, lo que deja en evidencia la escasa cobertura de recursos que tienen las finanzas rurales en los pequeños productores. En efecto, la magnitud de esta cartera es enorme si consideramos la oferta crediticia conjunta de los organismos de microcrédito que representa apenas el 3% de estas colocaciones. Los datos del cuadro 3 indican que los bancos comerciales que actúan en las microfinanzas son los segundos proveedores de crédito de las zonas rurales.

También se señala que la estructura de microfinanzas rurales en Chile depende absolutamente de la oferta crediticia que realiza INDAP. La labor que ejerce este organismo obedece a la ausencia de financiamiento en el sector rural. Sin embargo, su programa de créditos ha sido cuestionado y criticado por diversos sectores de la sociedad, especialmente por miembros del Congreso Nacional, centros de estudios y sectores de la prensa¹⁴. Las críticas apuntan a una mala gestión de la cartera, lo que podría haber significado pérdidas patrimoniales al Estado; y a la recuperación de créditos, que es notoriamente baja. Una evaluación realizada por la Cámara de Diputados en el año 1999, informó de una morosidad de 47.8% para los créditos que vencían ese año. Esta morosidad se manifiesta en forma mucho más acentuada en los créditos otorgados en forma asociativa.

El gráfico 1 muestra la evolución de la cartera de créditos de INDAP en pesos de 2003. En él se puede apreciar claramente una tendencia a la disminución de la oferta de créditos- en términos reales- en los últimos cuatro años. El crecimiento sostenido que se observa durante los años 1993-96, obedece a una política gubernamental expansiva orientada a dar un mayor acceso a créditos a los pequeños productores, tanto para proyectos de inversión o de producción anual. Durante esos años, no sólo se incrementó el aporte fiscal para este ítem, sino que además, la tasa de recuperación de créditos fue más alta (con niveles superiores a 90%). Esto permitió tener una mayor disponibilidad de recursos para nuevos créditos. Posteriormente, a partir de 1997, las tasas de

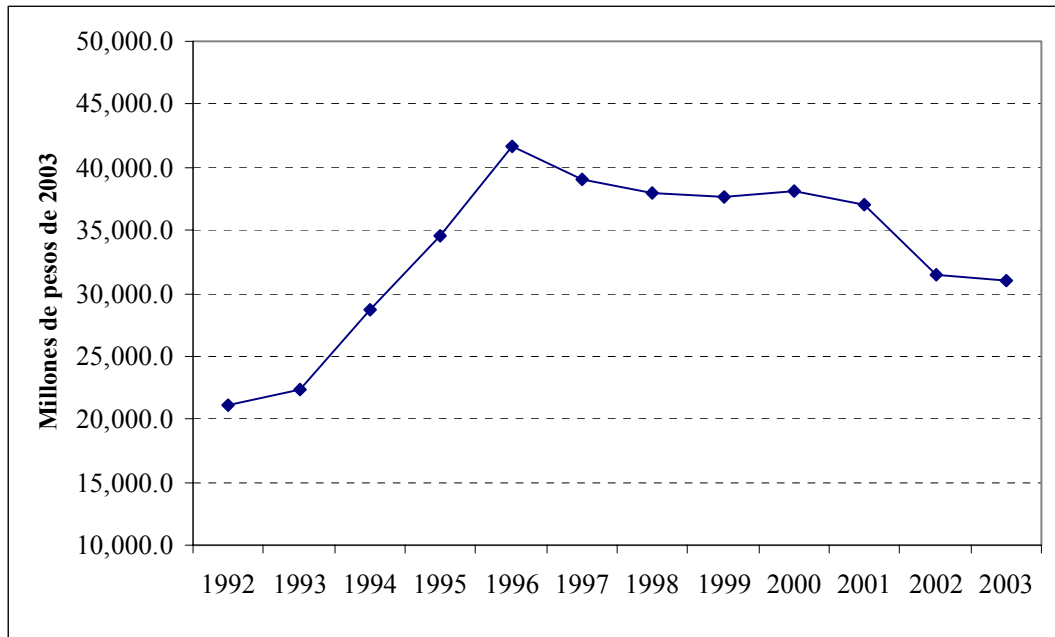
¹² Oficina de Políticas Agrarias, Ministerio de Agricultura.

¹³ Este monto de financiamiento agropecuario es superior dentro de los cuatro países analizados.

¹⁴ Ver: a) "La Mala Gestión Financiera de INDAP", Instituto Libertad y Desarrollo. Temas Públicos N°638, 08 de Agosto 2003 Además, b) "La Caja Negra de INDAP", La Nación. Martes 27 de mayo de 2003.

recuperación comienzan a caer drásticamente y no se generan reajustes en el aporte fiscal para incrementar el acceso a créditos. Se agrega a esta situación el mal desempeño que muestra la economía en su conjunto a partir de 1998, lo cual agrava la crisis de recuperación de las colocaciones.

**Gráfico 1- INDAP: Créditos totales colocados a diciembre de cada año
(Valores en pesos de 2003)**



Fuente: Elaboración propia a partir de información de ODEPA y del presupuesto de la nación.

Las críticas a INDAP y el mal desempeño de su cartera de créditos ha generado un proceso de modernización en el que se han tomado una serie de medidas que buscan mejorar la gestión crediticia, la evaluación del riesgo y el sistema de cobranza al interior del organismo. La creación de nuevos instrumentos en el ámbito de servicios financieros, puede ser interpretada como un cambio en el rol del financiamiento rural, ya que pretenden convertir a este organismo en un agente de desarrollo de segundo piso, operado a través de instituciones financieras intermediarias. En el año 2001 se creó el Bono de Articulación Financiera (BAF), un instrumento que entrega un subsidio a proveedores, previamente registrados, para cubrir en parte los costos de transacción en la entrega de microcréditos rurales. Según INDAP, se han establecido convenios de cooperación con 18 instituciones, incluidos 3 bancos comerciales. Los resultados para el año 2002 señalan que se cursaron alrededor de 1,000 créditos por un valor total de \$1.4 millones de dólares. Adicionalmente, se está estudiando la posibilidad de crear un Fondo de Garantía Agrícola que permita cubrir parte de las pérdidas de crédito impagos.

Para tener una dimensión de la demanda de financiamiento rural se utilizan los antecedentes de ODEPA. Un estudio de este organismo estimó, sobre la base del VI Censo Agropecuario de 1997, que el sector rural en Chile está compuesto por 270,000 pequeños productores, de los cuales alrededor de 176,000 se consideran pequeños productores empresariales y el resto son productores de subsistencia (ODEPA, 2000). Si nos remitimos a los productores microempresarios, la cobertura de las instituciones formales de microcrédito es de 37.3%. Este es un valor bastante prometedor si se compara con los datos de los demás países de la región. Sin embargo, de este total de productores que acceden, el 34% lo hace a través de INDAP, mientras que sólo el 3.3% accede por medio de los demás proveedores.

El amplio acceso a los créditos de INDAP se explica en gran medida por el fuerte componente de subsidio y la mínima exigencia de garantías reales que tienen sus servicios financieros, a lo que se suman las bajas tasas de interés. Además, en forma paralela a los créditos, se subsidia la entrega de asistencia técnica. Como los bancos formales prácticamente no cubren las zonas rurales, no cabe la menor duda que si este organismo retira su financiamiento de primer piso, muchos productores, especialmente los más pobres o vulnerables, verían disminuidas sus fuentes de financiamiento, obligándolos a refugiarse en los sectores informales.

LAS MICROFINANZAS RURALES EN ARGENTINA

La situación de las microfinanzas rurales en Argentina es menos promisorias que en Perú, Chile y Colombia. El mercado financiero rural está determinado principalmente por la presencia de algunos bancos públicos y provinciales; junto a ellos coexisten las cooperativas agropecuarias y un número muy reducido de ONG. El Estado mantiene el Programa Social Agropecuario (PSA), principal programa público (del Ministerio de Economía) que otorga financiamiento directo (créditos) a pequeños productores rurales, aunque su cobertura es muy baja aún. Además, el Estado mantiene un grupo de al menos cinco programas de asistencia financiera de segundo piso orientados a la microempresa, que están dirigidos a todos los sectores productivos de la economía, tanto urbanos como rurales¹⁵.

Junto a estos escasos proveedores formales y semi formales existe una gran cantidad de oferentes de crédito informal, representados por proveedores de insumos y tecnologías agropecuarias. Estos son considerados como los principales oferentes de créditos en las zonas rurales.

Cuadro 4 –Argentina: Distribución de la cartera agropecuaria y rural de las instituciones de microfinanzas valores estimados (miles de dólares)

	Nº instituciones con créditos rurales/ agropecuarios	Cartera rural estimada (MUS\$)	Nº clientes rurales/ estimados	Año de información
Bancos	5	s.i	s.i	-
Cooperativas Agropecuarias	12	1,105.3	6,300	2002
ONG	8	1,500.6	4,800	1999-2001
Organismo Público (PSA)	1	s.i.	6,500	2002
Subtotal Total	26		18,400	

Fuente: Elaboración propia a partir de: FONCAP, Características IMF. Documento de trabajo (Agosto 2002)

s.i: Sin información

El cuadro 4, muestra que las microfinanzas rurales en Argentina son reducidas y escasas. Sin considerar la oferta que realizan los bancos, se estima que la cartera de crédito de las cooperativas agropecuarias y de las ONG rurales no supera los 3.7 millones de dólares y no beneficia a más de 11,100 pequeños productores. Si se agrega a este valor los beneficiarios de créditos del PSA, con una cobertura de sólo 6,500 familias, se concluye que 18,400 pequeños productores tienen acceso al financiamiento rural en Argentina.

¹⁵ Se trata de: Créditos para la Producción Regional Exportable del Consejo Federal de Inversiones; FONAPyME - Fondo Nacional de Desarrollo para la MIPyME; Programa Global de Crédito a las Micro y Pequeña Empresa - MyPEs II; Crédito del Gobierno Italiano para PyMEs y FONCAP - Fondo de Capital Social.

Las ONG que intervienen en las zonas rurales son organismos que actúan en áreas específicas y con un reducido tamaño de clientes. Al parecer, las tecnologías crediticias existentes no permiten la conformación de instituciones de mayor tamaño. Como ejemplo se puede indicar que uno de los proyectos emblemáticos en microfinanzas rurales es la realizada por el Fondo de Inversión Social (FIS) el Ceibal que atiende a 261 personas con una cartera de 35,000 dólares para el año 2002. El tamaño y tecnología crediticia de esta organización le ha permitido tener una tasa de recuperación superior al 95% (Landó 2002).

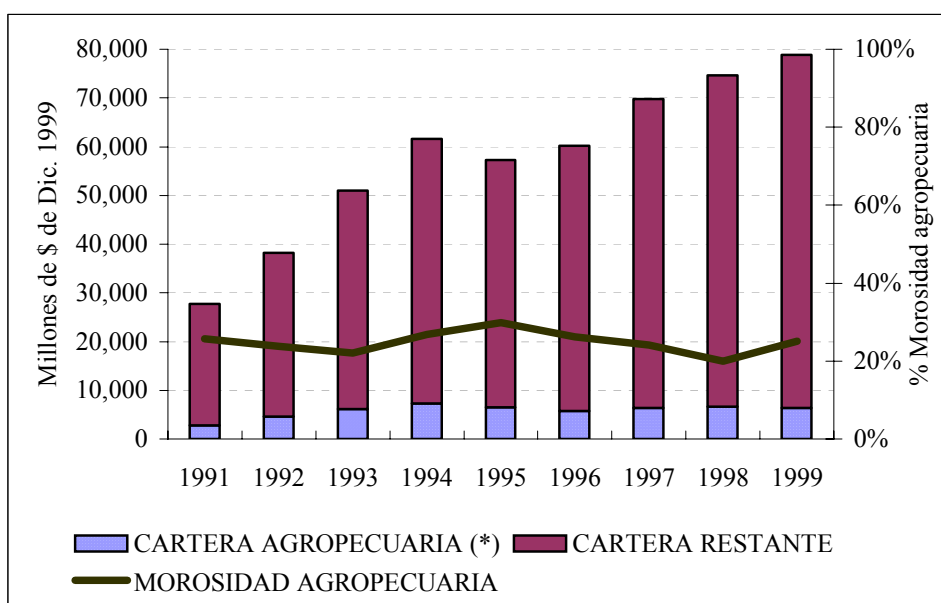
A inicios de la década de los '90, Argentina era uno de los países de América Latina con la menor profundización bancaria, el dinero circulante junto a los depósitos representaba sólo el 11% del PIB¹⁶, además un porcentaje muy bajo de la población accedía a los bancos comerciales (Wenner y Proenza 2002). A partir de 1991 se comienzan a ejecutar una serie de reformas al sistema financiero y se estimula el ingreso de capitales externos, lo que genera un incremento significativo de la monetarización de la economía. Esto provoca un incremento en la demanda, lo que hace aumentar las colocaciones totales del sistema, llegando a triplicarlas a fines de la década. El sector agropecuario también se vio beneficiado con esta situación, ya que incrementó sus recursos de crédito, incluso más que los otros sectores de la economía, llegando a representar sobre el 10% de las colocaciones entre los años 1991 y 1995¹⁷. Posteriormente, como consecuencia de la crisis mexicana (1995), la importancia del sector agropecuario comienza a caer. Actualmente, el principal oferente del crédito agropecuario es la banca pública, que representa el 60% de las colocaciones totales (Nava 2003). Los principales representantes son el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Una de las características del sector financiero agropecuario es la alta morosidad de la cartera. Las cifras oficiales señalan que los créditos morosos no han bajado del 20% en el total del sistema (gráfico 2). Por otro lado, algunos estudios sobre el desempeño del PSA indican que este programa tiene una morosidad cercana al 75% (Grupo Shopia 2002). Los argumentos que se señalan para explicar este hecho se remiten a la existencia de una marcada práctica del subsidio en la población rural, además existe la cultura del "no pago" de los créditos que otorga el gobierno central. Esta situación, evidentemente afecta cualquier iniciativa que se quiera realizar en las zonas rurales.

¹⁶ La profundidad financiera se mide como la suma de circulante y los depósitos– lo que se conoce como M2- sobre el Producto Interno Bruto.

¹⁷ En los casos de Perú y Chile, la cartera del crédito agropecuario no supera el 5% de las colocaciones totales del sistema financiero de cada país.

Gráfico 2- Argentina: Evolución de la Cartera Agropecuaria y Cartera Total



Fuente: FINAGRO (Unidad de Financiamiento Agropecuario) en base a datos del BCRA (<http://www.sagpya.mecon.gov.ar/>)

Se merece destacar el rol jugado por el Fondo Fiduciario de Capital Social-FONCAP- en el desarrollo de las microfinanzas en Argentina, ya que se considera parte de las políticas innovadoras en el tema. Este organismo nace en el año 1997 con el objeto de crear un esquema de financiación autosostenible y perdurable para el sector de la microempresa de menores recursos económicos. Aunque su cartera crediticia es de sólo \$7.8 millones de dólares, con ello administra dos líneas de crédito de segundo piso: a) Créditos a Instituciones de Financiamiento para Microempresas (IFM) y b) la Banca Micro. El primer instrumento apunta a las organizaciones ya consolidadas en el ámbito del microcrédito (ONG con mucha experiencia, Bancos y Financieras). Dentro de las IMF que actúan en el área rural se encuentran 12 cooperativas agropecuarias y varias de la ONG rurales. La línea de Banca Micro busca facilitar y controlar fondos para ONG que quieren iniciarse en la actividad del microcrédito, para lo cual FONCAP contribuye con un monto inicial de \$100,000 dólares (Grupo Sophia 2002). A pesar de los bajos montos que maneja este organismo, se ha convertido en un referente significativo para los proveedores de microcrédito tanto urbanos como rurales. No cabe duda que este Fondo es uno de los esfuerzos más significativos realizados en el país en el área de las microfinanzas, por lo que evaluar su desarrollo en el tiempo con el fin de identificar las lecciones aprendidas, pudiera ser una acción de interés también para otros países.

En el sector agropecuario de Argentina existe una diversidad de instrumentos financieros que son utilizados como solución frente a la escasez de crédito formal, entre los cuales se pueden encontrar: fondos de inversión, fideicomisos, warrants, leasings, pools de siembras, factoring y sociedades de garantía. Entre ellos están los fideicomisos, instrumento creado por el Gobierno con el objeto de movilizar la voluminosa cartera del Banco Hipotecario Nacional (NAVA 2003). Tienen una dinámica creciente en el último tiempo y han sido utilizados por pequeños productores asociados a cooperativas agropecuarias a través del FONCAP.

Con relación a la demanda de las microfinanzas rurales, ésta puede ser analizada mediante la información sobre la población objetivo del PSA, la que ha sido cuantificada en 159,712 familias¹⁸, basada en la estimación de productores minifundistas y que fue efectuada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988. Esta población representa un 40% del total de los productores argentinos. Los datos de acceso del cuadro 4, muestran que sólo el 9.4% del total de productores minifundistas tienen acceso a microfinanciamiento en Argentina (Craviotti y Soverna, 1999), aunque este valor no considera el acceso que se realiza a través de los bancos comerciales, se estima que no la incrementa significativamente, debido a las garantías exigidas por estos organismos.

¹⁸ El Programa no tiene establecida una población meta a atender, la determina anualmente en función de los recursos presupuestarios autorizados

LAS MICROFINANZAS RURALES EN COLOMBIA¹⁹

En Colombia las microfinanzas urbanas gozan de buena salud y se encuentran en crecimiento, aunque en las zonas rurales aún falta un mayor desarrollo. La principal característica de este país es que tiene una de las coberturas bancarias más altas de Latinoamérica; existe una agencia por cada 10,200 habitantes, indicador que es superior a México y comparable con Brasil. En las zonas rurales existe una sucursal bancaria cada 16,300 habitantes y el 68% de los municipios rurales cuenta con una agencia, el Banco Agrario de Colombia mantiene presencia en el 40% de los municipios rurales (Cuevas 2003).

Colombia es considerado pionero, desde principios de los años 90, en el tema de las microfinanzas urbanas, por ello ha servido de modelo para otros países de la región. Cuenta con una alta presencia de instituciones formales, semiformales y no formales. La cartera de microcréditos es superior a \$230 millones de dólares. Aún así, la cartera de microcréditos del sistema financiero regulado representa menos del 3% del total de créditos de los establecimientos. Las grandes empresas son las principales usuarias de los recursos financieros, generando una alta concentración: el 83.2% de la cartera se encuentra en poder de 5,000 deudores²⁰.

La creciente presencia e interés de los bancos comerciales en las microfinanzas²¹; un marco legal adecuado que reconoce el microcrédito; una política activa del gobierno hacia el desarrollo de las microempresas; y una alta demanda de recursos financieros, han generado un escenario propicio para que amplios sectores de la pequeña producción se hayan incorporado al sistema financiero formal. A pesar de estas ventajas, el sector rural no cuenta con la cobertura y diversidad institucional que existe en las capitales y ciudades intermedias, especialmente la orientada a la pequeña producción. Según un reciente estudio del Banco Mundial, sólo el 8% de los hogares campesinos tiene acceso al sistema bancario²².

La oferta crediticia para el sector agropecuario y rural en el año 2002 superó los US\$600 millones. El principal proveedor del sistema es FINAGRO²³, que

¹⁹ En el caso de Colombia, no ha sido posible la construcción de un cuadro que permita visualizar la dimensión de las microfinanzas en las zonas rurales y que pueda compararse con los demás países. La información que se analiza corresponde a datos puntuales obtenidos desde distintas fuentes.

²⁰ Portafolio, agosto 25 de 2003

²¹ La superintendencia Bancaria de Colombia y la Asociación Bancaria, mantienen un interés creciente que se refleja en la realización de seminarios, publicaciones y estudios de microfinanzas en Colombia.

²² El tiempo, lunes 6 de Octubre de 2003.

http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/HISTORICO_IMPRESO/econ_hist/2003-10-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_HIST-1275323.html

²³ El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, es parte de un esquema de financiamiento de segundo piso. Nace por decreto ley en 1990. Tiene como misión el

contribuye con más del 50% de los recursos. Los bancos comerciales- que también redescuentan de FINAGRO- están orientados fundamentalmente a agricultores medianos y grandes, quienes segmentan sus préstamos en montos medios y altos, sobre los 386 dólares (un millón de pesos colombianos) con una alta concentración (48%) sobre los 41,000 dólares y dos tercios sobre los \$37,000 dólares (Cuevas 2003). Estos montos les permiten a los bancos tener tasas de interés más bajas que el promedio del sistema. Los demás actores relevantes son las cooperativas (financieras, de ahorro y crédito) los cuales mantienen una segmentación de clientes orientada a productores medios. El mismo estudio del Banco Mundial indica que existe una amplia cobertura de los proveedores informales (insumos y tecnologías), quienes se encuentran segmentados hacia préstamos chicos (el 62% de los préstamos que entregan son menores a \$386 dólares), además con un alto costo para los pequeños productores y con tasas de interés superiores al 60% anual.

La experiencia de las ONG colombianas especializadas en microfinanzas es amplia y sostenida en las zonas urbanas, con una cartera total de microcréditos que les permite ocupar el segundo lugar a nivel nacional, siendo algunas de ellas de gran tamaño²⁴. En las zonas rurales, las ONG financieras se encuentran bastantes dispersas, aunque las más representativas están ubicadas en las zonas costeras (atlántica y pacífica). Estos organismos han iniciado y consolidado diferentes estrategias y tecnologías crediticias que complementan la oferta que realiza el sector formal.

Otra experiencia referida a microfinanzas rurales es la que desarrolla el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER). Este Programa pertenece al Ministerio de Agricultura y fue creado en el año 2000 con financiamiento del FIDA. A pesar de que uno de sus componentes es la entrega de servicios financieros rurales, posee una reducida escala de operaciones: hasta el año 2001 sólo se habían entregado 103 microcréditos.

El gobierno colombiano ha querido eliminar las distorsiones existentes en el ámbito rural. Una de las medidas adoptadas fue el cierre de la Caja Agraria en 1999, proceso que facilitó la creación del Banco Agrario²⁵. Además de las

financiamiento de las actividades agropecuarias mediante la canalización y administración de recursos suficientes y oportunos en concordancia con las políticas del gobierno nacional para contribuir al desarrollo económico y social del país, en especial del sector rural.

²⁴ Las ONG más significativas por su importancia dentro del sector (% de la cartera de microcréditos de las ONG) son: Fundación W.W.B.- CALI (32%), Fundación Mundo Mujer -FMM Popayán (17.2%), FMM Bucaramanga (13.7%), Corporación Mundial de la Mujer CMM Medellín (6.5%), CMM Medellín Colombia (WWB Bogotá con 6.6%) y Fundación Mario Santo Domingo (con 7.6%). En conjunto, estas ONG tienen una cartera de créditos de más de US\$57 millones y controlan más del 80% de la oferta de microcréditos de ONG Financieras.

²⁵ La Caja Agraria había perdido su sostenibilidad y no estaba cumpliendo su misión de entrega de créditos al sector rural. Sólo el 20% de los créditos eran rurales y presentaban una morosidad de 33%, además, tenía una alta carga de personal, lo que afectó su productividad (sobre los 8,000 empleados) (Restrepo, 2003)

reformas al marco legal, el actual gobierno busca fortalecer el acceso al crédito por parte de la microempresa urbana y rural, para lo que ha dispuesto una línea de financiamiento de segundo piso para los años 2002-2006 de U\$700 millones, los cuales serán canalizados a través de FINAGRO y el BANCOLDEX²⁶. Sin embargo, en el área rural el principal utilizador de estos recursos ha sido el Banco Agrario, apreciándose una escasa presencia de los demás actores, especialmente de las cooperativas y las ONG.

Por ello se puede apreciar que el problema de acceso al crédito por parte de los pequeños productores rurales en Colombia no se debe a la inexistencia de agencias bancarias, ni tampoco es por falta de recursos financieros. Según Cuevas (2003), esto se explica porque la banca, exceptuando al Banco Agrario²⁷, mantiene un marcado sesgo urbano en la captación y colocación de recursos. Los productos financieros que se ofrecen en las zonas rurales son iguales a los de las zonas urbanas y además, existe una escasa innovación en productos y metodologías de las instituciones con presencia rural. Existen algunas restricciones de uso legal que contribuyen a esta situación: el marco regulatorio no permite usar animales como garantía, siendo éste uno de los principales mecanismos de ahorro de las familias rurales. Esta situación se encuentra en debate actualmente en Colombia.

El mismo estudio del Banco Mundial realiza recomendaciones que apuntan a generar una política integral de acceso a los servicios financieros rurales. Aconsejan un rol más protagónico del Banco Agrario como impulsor de microcréditos y consideran que FINAGRO debe convertirse en una agencia de desarrollo de segundo piso. Ya se han realizado algunos avances en esta dirección: un comunicado de la Presidencia de la República de Colombia²⁸ anunció que para asegurar el desarrollo integral de las pequeñas empresas agropecuarias, el Banco Agrario recibirá solicitudes de microcréditos presentadas por ONG y fundaciones con experiencia en asesoría de microempresas; para ello, el Banco ha firmado convenios de asistencia técnica con estos organismos con la finalidad de realizar un plan de capacitación y asesoría en manejo administrativo, estrategias de comercialización, desarrollo del negocio y orientación para la solicitud del crédito.

²⁶ Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX). Esta institución es un organismo de crédito de segundo piso. Inicialmente orientado a clientes exportadores, desde este año (febrero de 2003) toma un rol relevante en las microfinanzas al realizarse el traspaso de los activos de la liquidación del Instituto de Fomento Industrial (IFI).

²⁷ Aunque el 86% de los desembolsos del BA están dirigidos al sector rural y el crédito agrario es el que pesa más en la cartera, el crédito no agropecuario viene creciendo en el último tiempo. Además, los servicios que más priman en las agencias rurales son las transferencias por sobre las captaciones (El Tiempo, lunes 6 de Octubre de 2003).

²⁸ <http://www.presidencia.gov.co/>, Bogotá, 13 mayo (CNE).

CONCLUSIONES

A modo de conclusión se entregan algunos de los principales aspectos, que a juicio del autor, son relevantes para la comprensión de las microfinanzas en América Latina y que se derivan del análisis realizado en los cuatro países.

1. *Las microfinanzas rurales aún tienen un escaso desarrollo y cobertura en todos los países analizados.* Aún en aquellos en donde existe un mayor desarrollo de microfinanzas en zonas urbanas (Perú y Colombia), el mercado de las microfinanzas rurales sigue siendo de escasa cobertura, si se considera el número de pequeños productores de las zonas rurales. Todos los países analizados muestran que menos del 8% de los hogares accede a financiamiento agropecuario y rural proveniente de fuentes formales y públicas. La excepción es Chile que mantiene una cobertura mayor (23%) debido a la fuerte presencia de un organismo público en el financiamiento de primer piso (INDAP).
2. *Los bancos comerciales que actúan en el financiamiento rural, muestran una clara segmentación y orientación hacia los medianos y grandes productores.* Las cifras analizadas demuestran que los bancos siguen siendo los principales oferentes de recursos financieros formales en las zonas rurales, sin embargo, la colocación de créditos está altamente concentrada en un número reducido de productores. Suponemos que la mayor parte de ellos se encuentran ligados a zonas productivas dinámicas, exportadoras y concentradas geográficamente. La importancia de los bancos comerciales, en términos de volumen de financiamiento, está siendo revisada en aquellos países en donde se manifiesta un mayor desarrollo de microfinanzas urbanas (Perú, Bolivia y Colombia), de modo que se buscan mecanismos que permitan que los recursos financieros de estas instituciones puedan colocarse en las zonas rurales a través de las IMF.
3. *Los proveedores informales son los principales proveedores de crédito en la zona rural y forman parte significativa en las microfinanzas rurales.* Aunque no se encuentra documentado, se estima que en todos los países más del 60% de los pequeños productores que acceden a créditos lo hacen a través de fuentes informales. El acceso de financiamiento a través de fuentes formales es cada vez menor a medida que existe mayor informalidad en la producción. En los países que no tienen un esquema de proveedores formales (Argentina), la participación de estos actores tiene una mayor importancia.
4. *La presencia de diferentes tipos de proveedores es determinante en el desarrollo de las microfinanzas rurales.* Tal como queda demostrado en el caso de Perú, la presencia de distintas formas de instituciones de microfinanzas (IMF) en las zonas rurales, implica una mayor profundización de estos mercados. En este país las IMF, especialmente ONG, han

demostrado ser sostenibles en el tiempo, logrando crecimiento y desarrollo. Además, las IMF manifiestan una alta capacidad de movilizar recursos del Estado, préstamos bancarios y fondos internacionales. Contrariamente, la situación en Argentina y Chile muestra que las IMF que actúan en el medio rural tienen un reducido tamaño, manifiestan una baja capacidad de gestión y poseen escasas tecnologías de crédito. Los elementos que impiden un mayor desarrollo de mercados de financiamiento rural son: i) los elevados costos de transacción que aún deben enfrentar para la entrega de colocaciones; ii) las exigencias de requisitos legales; iii) los altos riesgos derivados de la limitación de carteras de activos y pasivos; y, iv) la imposibilidad de poder realizar captaciones (ahorros), entre otros aspectos.

5. *Un marco regulatorio adecuado y una sólida promoción del Estado promueve y facilita el desarrollo de las microfinanzas rurales.* La legislación de Perú y Colombia permite la existencia de numerosos proveedores y en variadas formas jurídicas. Además, los gobiernos de ambos países demuestran una voluntad política fuerte y activa para desarrollar el sector de las microfinanzas y de las microempresas; también en los dos casos la legislación incluye a las microfinanzas como parte del sistema financiero. Los casos de Argentina y de Chile demuestran que no existe una cultura microfinanciera, y que se debe actuar en muchos ámbitos de la legislación y de promoción estatal para un mejor desarrollo de las microfinanzas tanto urbanas como rurales.
6. *Los bancos públicos y los programas de primer piso del Estado contribuyen al financiamiento en las zonas rurales, pero es necesario revisar su rol en el desarrollo de las microfinanzas rurales.* Los casos del Banco Agrario de Colombia, AGROBANCO de Perú, el Programa Social Agropecuario y FONCAP de Argentina, y de INDAP en Chile, demuestran que los fondos públicos tienen aún una fuerte presencia en los servicios financieros rurales. Sin embargo, es necesario indagar respecto de las subvenciones que los gobiernos realizan para subsidiar las tasas de interés, la condonación de créditos, la presencia de altos niveles de morosidad, etc. Estos elementos pueden afectar la formación de nuevos proveedores y la sostenibilidad de aquellas instituciones que operan con fondos propios sin un respaldo público. En la mayor parte de los países, las orientaciones de políticas sobre desarrollo de microfinanzas señalan que los organismos públicos deberían actuar como promotores de las microfinanzas a través de la creación de instancias de segundo piso. Aunque estas recomendaciones pueden diferir en aquellas zonas en donde el sector público manifiesta mejor sostenibilidad y se justifica una acción directa del Estado (es el caso del Banco Agrario de Colombia). Este punto es uno de los más importantes del debate sobre un mejor acceso de las microfinanzas en las zonas rurales. La discusión y consenso del rol del financiamiento público debe contribuir a generar sistemas financieros autosostenibles en las zonas rurales.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, G. (2003). "Las Microfinanzas Rurales y el AGROBANCO". Manuscrito. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

Aguilera, N. (1999) "Proyecto de Investigación Prácticas Prometedoras en Finanzas Rurales: La Situación en Chile". Manuscrito. Centro Peruano de Estudios Sociales. Lima.

Banco Interamericano de Desarrollo (2003) "Instrumentos innovadores para el financiamiento rural en el Cono Sur". Serie de informes técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible, BID, Washington DC.

Berger, M. (2000) "Las microfinanzas: Un mercado emergente dentro de los mercados emergentes". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Craviotti, C. y Soverna, S. (1999) "Los Programas de Desarrollo Rural Ejecutados en el Ámbito de la SAGPYA". Serie estudios e investigaciones N° 1. Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección de Desarrollo Agropecuario PROINDER. Buenos Aires.

Cuevas, C. (2003) "Finanzas Rurales en Colombia: Desafíos y Oportunidades". Mimeo Banco Mundial. Bogotá

Grupo Sophia (2002) "Microcrédito: presentación final". Manuscrito, Buenos Aires, Argentina.

FIDA (2003) "Política del FIDA en materia de financiación rural". Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Grupo de publicaciones del FIDA, Roma.

Instituto Cuanto (2000) "Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida Enniv – 2000". Lima.

Landó, M. (2002) "Taking Theory into Practice: How Could Microfinance in Rural Argentina be Improved to Reduce Vulnerability of Clients?" University of Bath, Department of Social and Policy Sciences, Msc in Business and Community. United Kingdom.

MINAG (2002) "Segundo Foro Electrónico: El Financiamiento Rural en el Perú", 17 de diciembre al 24 de enero 2002, Ministerio de Agricultura de Perú. www.portalagrario.gob.pe:8080/webopa/POgpa/foro/2foro/2foro.htm

Nava, O. (2003) "Políticas de Financiamiento de la Producción Agropecuaria en la Argentina". Estudios Agroalimentarios Componente A: Fortalezas y

Debilidades del Sector Agroalimentario. Documento 16. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-Argentina)

ODEPA (2000). "Clasificación de las Explotaciones Agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario Según Tipo de Productor y Localización Geográfica". Documento de Trabajo N° 5. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura Chile.

Portocarrero, F.; Trivelli, C. y Alvarado, J. (2002) "Microcrédito en el Perú: Quiénes Piden, Quiénes Dan". Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Lima, Perú.

Reardon, T.; Berdegú, J. y Escobar, G. (2001) "Empleo e ingreso rurales no agrícolas en América Latina: síntesis e implicaciones de políticas". RIMISP. Santiago, Chile. Publicación electrónica www.rimisp.org/getdoc.php?docid=1858

Restrepo, J. (2003) "Papel del Banco Agrario en el Financiamiento Rural", Banco Agrario de Colombia. Presentación, Cumbre Internacional de Microcrédito. Medellín, Septiembre de 2003. Panel: estrategias de lucha contra la pobreza, la protección social y la financiación de desarrollo urbano y rural. Bogotá

Trejos, J.D. (2003). "La Microempresa en el Perú a inicios del siglo XXI: Magnitud, importancia y características". Publicación del IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible de Perú.

Trivelli, C.; Galarza, F.; Aguilar, G. y Morales, R. (2003) "Situación del financiamiento rural en el Perú". Manuscrito. Instituto de Estudios Peruanos. Lima

Vogel, R. (2003) "Del Crédito Agrícola a las Finanzas Rurales: En Búsqueda de un Nuevo Paradigma". Ponencia Simposium Internacional: Experiencias y Desafíos en Microfinanzas y Desarrollo Rural. Quito – Ecuador.

Wenner, M.; Alvarado, J. y Galarza, F. Editores (2002) "Prácticas prometedoras en finanzas rurales: Experiencias de América Latina y el Caribe". Centro Peruano de Estudios Sociales, Banco Interamericano de Desarrollo, Academia de Centroamérica. Lima, Perú.

Wenner, M y Proenza, F. (2000) "Rural Finance in Latin America and the Caribbean: Challenges and Opportunities", Working Paper. Inter-American Development Bank, Sustainable Development Department Microenterprise Unit. Washington DC.